
Soberanía Popular

[George Soros](#)

Revisar este viejo concepto puede proteger a las poblaciones más vulnerables del mundo.

La soberanía es un concepto anacrónico originario de un tiempo pasado, cuando la sociedad estaba formada por gobernantes y súbditos, no por ciudadanos. Se convirtió en la piedra angular de las relaciones internacionales con el Tratado de Westfalia, en 1648. Durante la Revolución Francesa, el Rey fue depuesto y el pueblo asumió la soberanía. Pero pronto el concepto dinástico de soberanía dio paso a un concepto nacionalista de la misma. Hoy día, aunque no todos

los Estados-nación responden democráticamente ante sus ciudadanos, el principio de soberanía impide la intervención extranjera en sus asuntos internos.

Pero la soberanía real pertenece al pueblo, que la delega en sus gobiernos. Si éstos abusan de la autoridad que les han conferido, y los ciudadanos no pueden corregir ese abuso, la injerencia extranjera está justificada. Si la soberanía reside en las personas, la comunidad internacional puede penetrar en los Estados-nación para proteger los derechos de sus ciudadanos. En concreto, el principio de soberanía popular puede ayudar a resolver dos retos contemporáneos: los obstáculos al reparto eficaz de ayuda humanitaria en Estados soberanos y los que impiden acciones globales contra los Estados con conflictos internos.

La ayuda exterior no interfiere necesariamente en la soberanía de los Estados; los gobiernos pueden aceptarla o no. Tras gastarme casi 5.000 millones de dólares (unos 4.200 millones de euros) en este tipo de ayuda durante años, he comprobado los escollos a los que se enfrenta la ayuda extranjera.

En 1984, creé la primera fundación nacional en la Hungría comunista, seguida de otras fundaciones en unos 32 países, que han trabajado con presupuestos anuales de unos 450 millones de dólares en los últimos 10 años. Aunque las ofertas de ayuda extranjera no socaven la soberanía del Estado, ésta no debe distribuirse sólo a través de los gobiernos nacionales; también debe apoyar a gobiernos locales y ONG. Los gobiernos democráticos no deberían oponerse a la ayuda que reciben estos colectivos, pero precisamente los gobiernos que no cumplen los requisitos para recibir ayuda oficial son los que suelen obstaculizar la utilización de los canales no gubernamentales. Estas objeciones constituyen un argumento prima facie que apoya la tesis de que esos regímenes vulneran la soberanía popular. Así, el apoyo a la sociedad civil cobra aún más fuerza.

Este principio ha guiado mis fundaciones. En todos los países creamos un consejo local de ciudadanos para canalizar nuestro apoyo. Estos consejos trabajan con los gobiernos cuando es posible; cuando no lo es, limitan su apoyo a la sociedad civil y combaten la intromisión del Estado. Por ahora, las fundaciones han combatido con éxito la represión porque a los gobiernos no les gusta castigar públicamente a las organizaciones que sirven a los intereses de los ciudadanos. Recuerden lo que ocurrió en Yugoslavia a finales de la era Milosevic: aunque Belgrado ilegalizó mi fundación, nunca hizo cumplir la medida, y la fundación pudo seguir activa.

Cuando los Estados no protegen a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe asumir esta responsabilidad

Los gobiernos extranjeros y organizaciones humanitarias internacionales pueden presionar más que las fundaciones privadas contra la intromisión de los gobiernos en la ayuda a las ONG. Incluso los regímenes más represivos pretenden guiarse por el interés del pueblo, lo que suele granjearles la desaprobación diplomática. Aunque la presión internacional puede ser contraproducente –en Zimbabue la confiscación de tierras a la minoría blanca hirió la sensibilidad de los africanos,

y el presidente Robert Mugabe consiguió desviar la repulsa internacional presentándose como un luchador contra la opresión colonial—, siempre puede encontrarse el punto adecuado de presión. Por ejemplo, cuando Egipto encarceló al activista demócrata Saad Eddin Ibrahim en 2000 por —entre otras acusaciones— aceptar contribuciones extranjeras no autorizadas, EE UU congeló un paquete de ayuda suplementaria a ese país. El Tribunal Supremo egipcio absolvió a Ibrahim en marzo de 2003, lo que reafirmaba la libertad de expresión y de recibir fondos del extranjero.

Ya que los conflictos armados y los regímenes represivos pueden suponer un peligro fuera de sus países, a todas las naciones democráticas les interesa superar los problemas de la actuación colectiva para promover sociedades abiertas en todo el mundo. Cuanto antes comience una acción preventiva, más económica y eficaz será. En la antigua Yugoslavia, por ejemplo, una presión exterior más temprana —cuando se suprimió la autonomía de Kosovo en 1990 o un año después, cuando la Armada yugoslava bombardeó Dubrovnik— podría haber evitado la tragedia sufrida en los Balcanes en la siguiente década.

En los Estados bálticos, especialmente Estonia y Letonia, encontramos ejemplos positivos de la prevención de conflictos. Estos Estados se integraron forzosamente en la Unión Soviética en 1940, y gran parte de su población fue deportada y reemplazada por personas de otras nacionalidades. Al recuperar la independencia en 1991, lucharon con energía para negar los derechos de ciudadanía a los miembros de estas otras nacionalidades. La discriminación de la numerosa población rusa ofrecía a Rusia una excusa creíble para una intervención armada, pero la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) y la Unión Europea presionaron a los Estados bálticos para que garantizaran los derechos de las minorías. Mis fundaciones, entre otras, ofrecieron formación lingüística y apoyaron otras vías de reconciliación étnica. Así se desactivó una crisis potencial.

Desgraciadamente, una no-crisis no sale en titulares. Actualmente, las condiciones han de deteriorarse considerablemente antes de que los gobiernos extranjeros adopten una actitud firme. Pero para cuando las espantosas imágenes de televisión despierten la indignación del público occidental, será demasiado tarde para evitar el desastre. Y a medida que las crisis se multiplican, la opinión pública se vuelve menos sensible, permitiendo que se enconen situaciones peligrosas. La tardía intervención estadounidense en Liberia es un caso típico. Es imposible, por supuesto, predecir qué conflictos degenerarán en derramamiento de sangre; la prevención más eficaz es la que reduce el riesgo de que las crisis se desarrollen. La mejor manera de conseguir este objetivo es fomentar sociedades abiertas y democráticas. Éste ha sido el objetivo de mis fundaciones desde antes de la desintegración del imperio soviético. Debe ser perseguido a mayor escala.

Esta aspiración nos lleva a reconsiderar el principio de soberanía. Como ha afirmado el secretario general de la ONU, Kofi Annan, “la soberanía nacional (...) está siendo redefinida (...) por las fuerzas de la globalización y por la cooperación internacional. Los Estados son (...) instrumentos al servicio de sus pueblos, y no al revés”. En efecto, los gobernantes de un Estado soberano tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos. Cuando no lo hacen, la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad. La atención global es a menudo la única tabla de salvación de los oprimidos.

Revisar este viejo concepto puede proteger a las poblaciones más vulnerables del mundo. [George Soros](#)

La soberanía es un concepto anacrónico originario de un tiempo pasado, cuando la sociedad estaba formada por gobernantes y súbditos, no por ciudadanos. Se convirtió en la piedra angular de las relaciones internacionales con el Tratado de Westfalia, en 1648. Durante la Revolución Francesa, el Rey fue depuesto y el pueblo asumió la soberanía. Pero pronto el concepto dinástico de soberanía dio paso a un concepto

nacionalista de la misma. Hoy día, aunque no todos

los Estados-nación responden democráticamente ante sus ciudadanos, el principio de soberanía impide la intervención extranjera en sus asuntos internos.

Pero la soberanía real pertenece al pueblo, que la delega en sus gobiernos. Si éstos abusan de la autoridad que les han conferido, y los ciudadanos no pueden corregir ese abuso, la injerencia extranjera está justificada. Si la soberanía reside en las personas, la comunidad internacional puede penetrar en los Estados-nación para proteger los derechos de sus ciudadanos. En concreto, el principio de soberanía popular puede ayudar a resolver dos retos contemporáneos: los obstáculos al reparto eficaz de ayuda humanitaria en Estados soberanos y los que impiden acciones globales contra los Estados con conflictos internos.

La ayuda exterior no interfiere necesariamente en la soberanía de los Estados; los gobiernos pueden aceptarla o no. Tras gastarme casi 5.000 millones de dólares (unos 4.200 millones de euros) en este tipo de ayuda durante años, he comprobado los escollos a los que se enfrenta la ayuda extranjera. En 1984, creé la primera fundación nacional en la Hungría comunista, seguida de otras fundaciones en unos 32 países, que han trabajado con presupuestos anuales de unos 450 millones de dólares en los últimos 10 años. Aunque las ofertas de ayuda extranjera no socaven la soberanía del Estado, ésta no debe distribuirse sólo a través de los gobiernos nacionales; también debe apoyar a gobiernos locales y ONG. Los gobiernos democráticos no deberían oponerse a la ayuda que reciben estos colectivos, pero precisamente los gobiernos que no cumplen los requisitos para recibir ayuda oficial son los que suelen obstaculizar la utilización de los canales no gubernamentales. Estas objeciones constituyen un argumento prima facie que apoya la tesis de que esos regímenes vulneran la soberanía popular. Así, el apoyo a la sociedad civil cobra aún más fuerza.

Este principio ha guiado mis fundaciones. En todos los países creamos un consejo local de ciudadanos para canalizar nuestro apoyo. Estos consejos trabajan con los gobiernos cuando es posible; cuando no lo es, limitan su apoyo a la sociedad civil y combaten la intromisión del Estado. Por ahora, las fundaciones han combatido con éxito la represión porque a los gobiernos no les gusta castigar públicamente a las organizaciones que sirven a los intereses de los ciudadanos. Recuerden lo que ocurrió en Yugoslavia a finales de la era Milosevic: aunque Belgrado ilegalizó mi fundación, nunca hizo cumplir la medida, y la fundación pudo seguir activa.

Cuando los Estados no protegen a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe asumir esta responsabilidad

Los gobiernos extranjeros y organizaciones humanitarias internacionales pueden presionar más que las fundaciones privadas contra la intromisión de los gobiernos en la ayuda a las ONG. Incluso los regímenes más represivos pretenden guiarse por el interés del pueblo, lo que suele granjearles la desaprobación diplomática. Aunque la presión internacional puede ser contraproducente –en Zimbabue la confiscación de tierras a la minoría blanca hirió la sensibilidad de los africanos, y el presidente Robert Mugabe consiguió desviar la repulsa internacional presentándose como un luchador contra la opresión colonial–, siempre puede encontrarse el punto adecuado de presión. Por ejemplo, cuando Egipto encarceló al activista demócrata Saad Eddin Ibrahim en 2000 por –entre otras acusaciones– aceptar contribuciones extranjeras no autorizadas, EE UU congeló un paquete de ayuda suplementaria a ese país. El Tribunal Supremo egipcio absolvió a Ibrahim en marzo de 2003, lo que reafirmaba la libertad de expresión y de recibir fondos del extranjero.

Ya que los conflictos armados y los regímenes represivos pueden suponer un peligro fuera de sus países, a todas las naciones democráticas les interesa superar los problemas de la actuación colectiva para promover sociedades abiertas en todo el mundo. Cuanto antes comience una acción

preventiva, más económica y eficaz será. En la antigua Yugoslavia, por ejemplo, una presión exterior más temprana –cuando se suprimió la autonomía de Kosovo en 1990 o un año después, cuando la Armada yugoslava bombardeó Dubrovnik– podría haber evitado la tragedia sufrida en los Balcanes en la siguiente década.

En los Estados bálticos, especialmente Estonia y Letonia, encontramos ejemplos positivos de la prevención de conflictos. Estos Estados se integraron forzosamente en la Unión Soviética en 1940, y gran parte de su población fue deportada y reemplazada por personas de otras nacionalidades. Al recuperar la independencia en 1991, lucharon con energía para negar los derechos de ciudadanía a los miembros de estas otras nacionalidades. La discriminación de la numerosa población rusa ofrecía a Rusia una excusa creíble para una intervención armada, pero la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) y la Unión Europea presionaron a los Estados bálticos para que garantizaran los derechos de las minorías. Mis fundaciones, entre otras, ofrecieron formación lingüística y apoyaron otras vías de reconciliación étnica. Así se desactivó una crisis potencial.

Desgraciadamente, una no-crisis no sale en titulares. Actualmente, las condiciones han de deteriorarse considerablemente antes de que los gobiernos extranjeros adopten una actitud firme. Pero para cuando las espantosas imágenes de televisión despierten la indignación del público occidental, será demasiado tarde para evitar el desastre. Y a medida que las crisis se multiplican, la opinión pública se vuelve menos sensible, permitiendo que se enconen situaciones peligrosas. La tardía intervención estadounidense en Liberia es un caso típico. Es imposible, por supuesto, predecir qué conflictos degenerarán en derramamiento de sangre; la prevención más eficaz es la que reduce el riesgo de que las crisis se desarrollen. La mejor manera de conseguir este objetivo es fomentar sociedades abiertas y democráticas. Éste ha sido el objetivo de mis fundaciones desde antes de la desintegración del imperio soviético. Debe ser perseguido a mayor escala.

Esta aspiración nos lleva a reconsiderar el principio de soberanía. Como ha afirmado el secretario general de la ONU, Kofi Annan, “la soberanía nacional (...) está siendo redefinida (...) por las fuerzas de la globalización y por la cooperación internacional. Los Estados son (...) instrumentos al servicio de sus pueblos, y no al revés”. En efecto, los gobernantes de un Estado soberano tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos. Cuando no lo hacen, la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad. La atención global es a menudo la única tabla de salvación de los oprimidos.

George Soros es financiero, filántropo y autor del libro *The Bubble of American Supremacy* (Public Affairs, Nueva York, 2004)[La burbuja de la supremacía americana, que será publicado en España por la editorial Debate en abril].

Fecha de creación

29 julio, 2007